

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SETENTA Y DOS CIVIL MUNICIPAL
CONVERTIDO TRANSITORIAMENTE EN EL JUZGADO 54 DE PEQUEÑAS
CAUSAS ACUERDO 11-127/18**

Bogotá D. C, seis (6) de julio de dos mil veinte (2020)

CLASE DE PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: JONATTAN VILLA TORRES

ACCIONADA: COORDINADORA MERCANTIL S.A.

RADICACIÓN No.: 110014003072202000454-00

PROVIDENCIA: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede el Despacho a resolver la demanda de tutela formulada por JONATTAN VILLA TORRES, actuando en causa propia, contra COORDINADORA MERCANTIL S.A..

ANTECEDENTES

1. Por esta vía judicial el accionante, pretende que se ordene a la accionada, responda la petición que elevó el 21 de mayo de 2020, por las cuales solicitó: *i) Carta de despido con los motivos por los cuales la empresa tomo la decisión de terminar el contrato laboral; ii) copia de los descargos rendidos y iii) carta dirigida a la Eps Famisanar para hacer el examen de retiro.*

2. La accionada COORDINADORA MERCANTIL informó que el día 24 de junio de 2020, contestó y dio respuesta al derecho de petición enviando la comunicación a los correos de notificación indicados en el requerimiento, por ello se opone a los requerimientos de la acción de tutela debido a que se se configuro la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES

Como quiera que la presente acción se cimienta fundamentalmente en la supuesta transgresión del derecho de petición de la señora Doris Inés Amaya Velásquez, el cual es un derecho fundamental, resulta que efectivamente está

legitimada en la causa para proponer la presente acción. privada sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera en razón a su objeto social y como este mecanismo constitucional procede contra los particulares que presten servicios públicos resulta que la accionada está plenamente legitimada por pasiva para atender este trámite.

2. Por su parte COORDINADORA MERCANTIL S.A. y de conformidad con los antecedentes se hace necesario precisar que la procedencia del mecanismo constitucional se enmarca en el amparo a los derechos fundamentales dentro de los que se encuentra el derecho de petición concebido por el artículo 23 de la Carta Política. Por él, las personas obtienen información sobre situaciones que pueden ser de interés general o particular pudiendo reclamar contestación a las solicitudes instauradas ante las autoridades.

Sin embargo, respecto a las peticiones presentadas ante los particulares, dicha controversia ha sido condicionada por el máximo tribunal constitucional en las siguientes situaciones: (i) cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad, el derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración; (ii) cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata; y (iii) en caso que la acción de tutela se dirija contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el legislador lo reglamente (sentencia T-419 de 2013).

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido igualmente que el fundamento jurídico de la tutela contra particulares procede también en la situación en que el solicitante se encuentre en un estado de indefensión o de subordinación, y esta facultad tiene fundamento jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que quien se encuentra en alguna de las situaciones referidas no cuenta con las mismas posibilidades de defensa que otro particular, por ello el Estado debe acudir a la protección (sentencia T 131 de 2006)

2.1 En el caso bajo estudio se encuentra que el actor persigue la protección a su derecho fundamental, explicando que, la accionada no ha dado respuesta a la petición que formuló en la que solicitó *Carta de despido con los motivos por los cuales la empresa tomo la decisión de terminar el contrato laboral; ii) copia de los descargos rendidos y iii) carta dirigida a la Eps Famisanar para hacer el examen*

de retiro, por lo que se entrará a analizar si la petición se enmarca dentro de las tres causales que cubre la jurisprudencia constitucional para ser susceptibles de conocimiento a través de esta acción tutelar, dada la connotación de particular que ostenta el accionado.

2.2 Del análisis de los hechos arrimados a este trámite, no se infiere que el accionado preste un servicio público o que desarrollen funciones de autoridad, por lo que se descarta en primera medida el estudio respecto al primer evento dictado por la Corte Constitucional para realizar el estudio de la tutela interpuesta.

2.3. De otro lado, se observa que la actora persigue la protección de su derecho fundamental de petición, sin que haya aludido a algún otro derecho de rango constitucional que se le afecte o que se encuentre supeditado a la resolución de la solicitud que dirigió al accionado.

2.4. Respecto del derecho fundamental contra particulares, que no actúan como autoridad, se advierte que dicha prerrogativa no ha sido desarrollada por el legislador mediante la ley estatutaria correspondiente, de manera que tampoco desde esta arista, emerge la causal de legitimación por pasiva.

2.5 De otro lado respecto a la indefensión frente al sujeto accionado, al respecto, debe memorarse que el máximo tribunal constitucional, concluyó que la indefensión se manifiesta cuando la persona afectada en sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuentan resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.

Desde este punto de vista, se observa que el accionante y la accionada se encuentran en una relación de subordinación debido a que el actor trabajaba en la empresa accionada, por lo que se concluye que el petente se encuentra en estado de subordinación frente a la accionada, y es razón de ello, por lo que se analizara el derecho de petición, instaurado en esta acción.

3. Respecto a la inmediatez se advierte que como a la fecha de presentación de la presente acción, se alega no haber recibido respuesta al derecho de petición aludido, el cual se radicó el 21 de mayo de 2020, se encuentra que se entabló este mecanismo dentro de un tiempo razonable.

4. Sentado esto, debe memorarse que la acción de tutela se enmarca dentro del principio de subsidiariedad, punto en el que se resalta que el ordenamiento

jurídico no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo y eficaz, diferente a la acción de tutela, que permita efectivizar el derecho fundamental de petición.

De tal suerte, quien sienta lesionada dicha prerrogativa, en razón a que la contestación esperada no le fue producida o comunicada en los términos de ley, puede acudir a la acción de tutela en procura del amparo constitucional.

5. Superados los anteriores presupuestos procesales, se entra al análisis de fondo del asunto, advirtiéndose que el problema jurídico constitucional a resolver se enmarca en si la entidad accionada, vulneró el derecho fundamental de petición de las accionantes por la falta de contestación a la solicitud impetrada.

5.1. En repetidas oportunidades la Corte Constitucional ha estipulado, que los componentes de la garantía fundamental de petición, de conformidad con la estructura de la misma, son: *“2. La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características: (i) Que sea oportuna; (ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados. (iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario”*¹.

5.2. De conformidad con el material obrante en el plenario y las manifestaciones de las partes, se observa que a la fecha de radicación de la presente acción, no se había emitido respuesta por parte de la accionada Coordinadora Mercantil S.A. a la petición elevada por el accionante, desde el 21 de mayo de 2020, razón por la que se tiene que, en principio la accionada omitió dar respuesta de manera oportuna a la petición dentro del término que establece la ley.

5.3. De las pruebas aportadas al plenario, se observa que la accionada Coordinadora Mercantil S.A. ya dio respuesta al derecho de petición y el cual fue enviado a los correos electrónicos informados en la petición y en la acción constitucional.

5.4. Analizando el contenido de las respuestas emitidas por la accionada, se observa que la información suministrada resulta clara y completa, debido a que lo solicitado son copias de su carta de despido y los descargos, sin embargo, respecto a la autorización para la cita médica de retiro de la empresa, le informó que en el documento que respalda la liquidación definitiva de prestaciones

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-725 de 2012.

sociales, claramente se indicó que si desea practicar el examen de egreso debe contactarse en un término de 5 días a partir de la fecha de retiro; indicó que la terminación del vínculo contractual se dio el 11 de febrero de 2020 y la solicitud se realizó hasta el 21 de mayo, por lo que el requerimiento de la cita médica se realizó de manera extemporánea.

Adicionalmente es oportuno agregar, que como lo ha indicado el máximo Tribunal Constitucional, las contestaciones de fondo no significan *per se* obtener una resolución favorable de lo que fue pedido (sentencia T-456 de 2008).

5.3. Llegado a este punto, el pronunciamiento de la entidad del que se acreditó su recibo, permite colegir que sobrevino el fenómeno jurídico denominado hecho superado, y por ende, la acción constitucional carece en estos momentos de objeto. En este sentido la súplica invocada se resolverá desfavorablemente, adicionalmente.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Juzgado Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá D.C., transitoriamente Juzgado 54 de Pequeñas Causas, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

Primero: NEGAR la presente acción de tutela respecto a los derechos invocados por JONATTAN VILLA TORRES, por hecho superado.

Segundo: NOTIFICAR esta decisión a las partes, y de no ser impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.



LIDA MAGNOLIA AVILA VASQUEZ
Jueza

